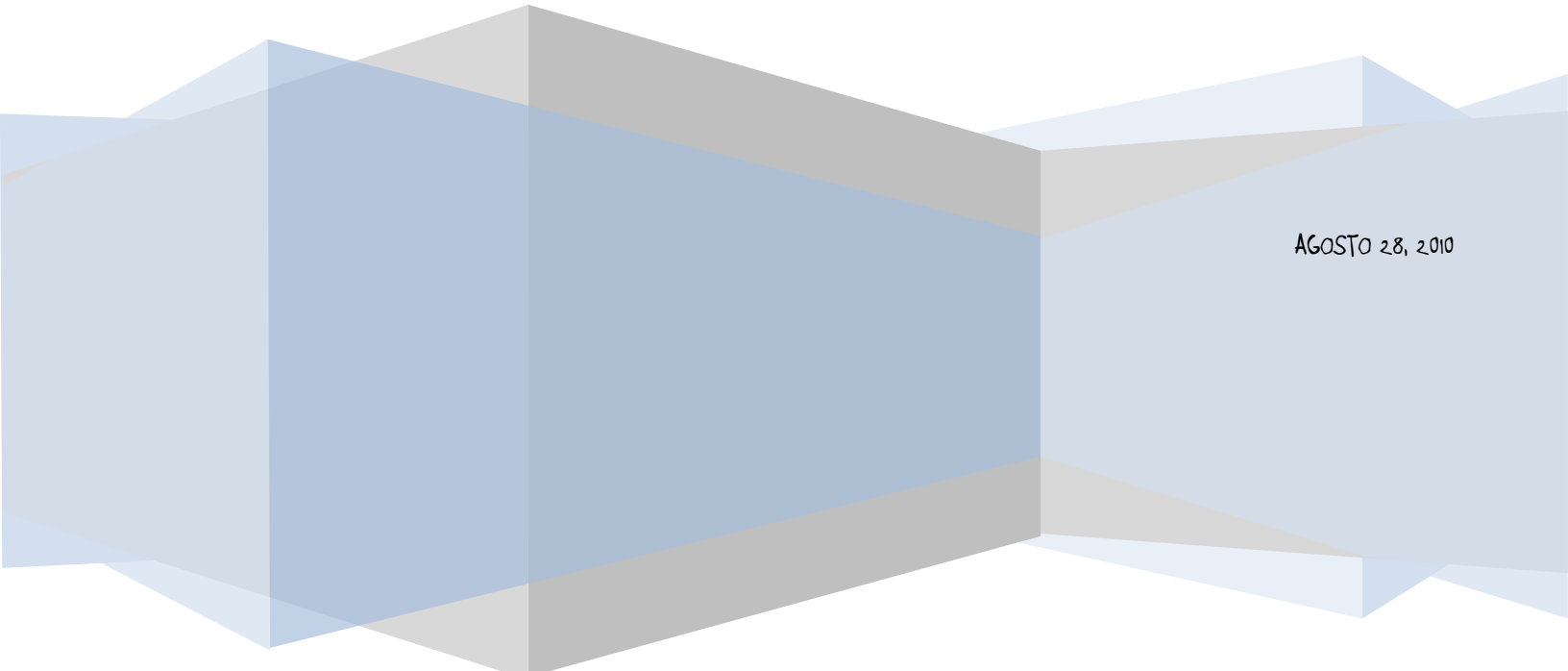


GENOCIDIO

*Movimiento Migrante Mesoamericano, Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina
Unida, Tribunal Internacional de Conciencia de los pueblos en Movimiento*

Marta Sánchez Soler

AGOSTO 28, 2010



PROTESTA/CONFERENCIA DE PRENSA HOLOCAUSTO MIGRANTE

El viernes 27 de Agosto del 2010 realizamos una conferencia de prensa en coordinación con otras organizaciones entre las que contamos: SERAPAZ (anfitrión), Todos los Derechos para Todos, Sin Fronteras, Post-grado de Derechos Humanos de la UACM, SICSAL-México, Familia Latina Unida, Movimiento Migrante Mesoamericano, Nuestros Lazos de Sangre y el Comité Promotor del Primer Tribunal Internacional de los Pueblos en Movimiento. Después de la conferencia nos manifestamos frente a la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el Instituto Nacional de Migración con el fin de hacer la *presentación de carpetas donde hacemos constar que hemos denunciado, exigido, manifestado, debatido, solicitado hasta el cansancio y nunca recibimos respuesta alguna. La masacre ocurrida en Tamaulipas contra inmigrantes centroamericanos y sudamericanos no es un acontecimiento aislado. Es recurrente, y es el irreparable y vergonzoso agravio mayor entre muchos de los crímenes que se cometen impunemente, con complicidad oficial y sistemáticamente contra los migrantes en México.* En reunión con el Director de Concertación Social de la Secretaría de Gobernación, expusimos nuestros motivos, le anunciamos formalmente que serian enjuiciados por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en Quito (oct) y en Mexico (nov), y le entregamos los comunicados recibidos de las diferentes organizaciones que trabajan con los migrantes, de los diferentes albergues y de organizaciones centroamericanas. (Anexas)

COMUNICADO DE PRENSA - HOLOCAUSTO MIGRANTE

Agosto 27, 2010, México, DF.- Expresamos nuestra solidaridad más plena, dolor, e indignación ante la noticia de la masacre de 72 de nuestras hermanas y hermanos migrantes de origen ecuatoriano, hondureño, salvadoreño y brasileño acontecido en San Fernando, Tamaulipas, por desgracia y vergüenza en la Republica Mexicana.

La masacre señalada es el resultado predecible de las políticas migratorias y de "seguridad" del estado mexicano que han fomentado condiciones de vulnerabilidad y criminalización de los migrantes al intentar ejercer su derecho a migrar con dignidad por territorio mexicano y de los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario pisoteadas por autoridades estatales de todos los niveles en complicidad con sectores de la delincuencia organizada, produciendo más de 10,000 secuestros documentados de migrantes durante el último año, y un patrón recurrente de extorsiones, asesinatos y violaciones.

El criminal descuido y complicidad de las autoridades mexicanas frente al fenómeno de la migración en tránsito en nuestro país, los descalifica para exigir con autoridad moral el respeto a los derechos humanos de los mexicanos expulsados. México ya ha acreditado en fehacientemente su carácter internacionalmente reconocido y documentado de violador sistemático, recurrente de los derechos humanos, y responsabilidad, complicidad y omisiones ante patronos de paramilitarismo, desplazamiento forzado, etc. (Como consta en informes y exhortos múltiples de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes reiterados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de ciudadano/as independientes de la Unión Europea, Parlamento Europeo, y de las organizaciones mexicanas defensoras de los derechos humanos etc. etc.). Ninguno de estos organismos es ya engañado por las permanentes y mentirosas campañas que el gobierno de México instrumenta en todos los foros internacionales presentándose como el paladín del respeto y de la defensa de los derechos humanos.

La profundidad y extensión de las actividades del crimen organizado, de sicarios, paramilitares y narcotraficantes, -tanto hacia el norte como hacia el sur de nuestro Continente-, se parece a una verdadera operación de desestabilización para justificar el cerco militar y represivo frente a los procesos de cambio que nacen desde la

movilización de nuestros pueblos. De aquí, la criminalización de los defensores de los derechos humanos y de los movimientos de justicia social que se encuentran acosados y en muchos casos encarcelados injustamente y en permanente peligro de asaltos, levantones, desapariciones, etc., en manos de las fuerzas del orden y de sus aliados.

No permitiremos que este crimen masivo de lesa humanidad se sume a otros demasiado numerosos donde ha prevalecido la impunidad y la indiferencia, nos convertiremos en sombra persistente y exigente hasta que las autoridades responsables nos den una explicación contundente de lo sucedido y un castigo ejemplar para los perpetradores de este espeluznante crimen de lesa humanidad.

Son demasiadas muertes las de los migrantes en tránsito por México y en nuestra frontera norte. Una sería demasiado- pero los alcances de esta tragedia la convierten en un inaceptable y real **holocausto migrante**. Esperamos que el repudio de la comunidad internacional ante la masacre de los migrantes en México, haga reaccionar a las autoridades que, hasta ahora, han hecho caso omiso de nuestras denuncias, quejas y reclamos.

NI UN MUERTO MÁS - NI UN MUERTO MÁS - NI UN MUERTO MÁS

**Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Movimiento Migrante Mesoamericano,
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento.**

<http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/27/la-travesia-mexicana-de-los-inmigrantes-que-conduce-a-una-fosa-comun>

<http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/28/los-migrantes-que-son-victimas-del-crimen-o-de-funcionarios-mexicanos>

<http://noticias.univision.com/mexico/videos/video/2010-08-27/lucha-por-migrantes-desaparecidos-en>



**CORREO
ILUSTRADO**

 **Sábado 28 de agosto de 2010**

El Correo Ilustrado

Dolor e indignación

Escribimos en nombre del comité promotor del Tribunal Internacional de Conciencia y Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento para expresar nuestra solidaridad más plena, dolor e indignación ante la noticia de la masacre de 72 de nuestras hermanas y hermanos migrantes de origen ecuatoriano, hondureño, salvadoreño y brasileño en San Fernando, Tamaulipas. No permitiremos que este crimen de lesa humanidad, el peor crimen colectivo en la historia reciente de este país desde la masacre de Acteal, se sume a otros demasiado numerosos donde ha prevalecido la impunidad y la indiferencia, como los *feminicidios* de Ciudad Juárez.



La masacre señalada es el resultado predecible de las políticas migratorias y de seguridad del Estado mexicano, que han fomentado condiciones de vulnerabilidad y criminalización de los migrantes al intentar ejercer su derecho a pasar con dignidad por territorio mexicano, y sus derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario. Estos derechos son pisoteados sistemáticamente por autoridades estatales de todos los niveles en complicidad por acción y por omisión con sectores de la delincuencia organizada. Todo esto se refleja también en agresiones estatales y paraestatales contra las casas del migrante en todo el país. Este contubernio ha producido más de 10 mil secuestros documentados de migrantes durante el último año, y un patrón recurrente de asesinatos y violaciones. Rechazamos también la versión oficial incipiente que intenta atribuir los crímenes de San Fernando a pugnas entre bandas de narcotraficantes. ¡Ya basta!, no en nuestro nombre.

Nos comprometemos en nombre de este tribunal, el primero de su tipo enfocado a fincar responsabilidades por violaciones de la dignidad y los derechos de migrantes, refugiado/as y desplazado/as de todo el mundo, a asumir este caso emblemático como uno de los ejes clave de las primeras sesiones de esta instancia que se realizarán en Quito, Ecuador, el 7 y 9 de octubre y en la ciudad de México el 4, 5 y 6 de noviembre.

Fray Raúl Vera López, OP, obispo de Saltillo; monseñor Samuel Ruiz García; Alfonso Anaya, SICAL-México; Ignacio del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; Miguel Concha, CDH Fray Francisco de Vitoria; Pablo Romo, Serapaz; Elvira Arellano, Familia Latina Unida Sin Fronteras; Óscar Alzaga, ANAD; Camilo Pérez Bustillo, posgrado de derechos humanos de la UACM; Carlota Botey Estapé, Marta Sánchez Soler, Movimiento Migrante Mesoamericano, y otras 87 firmas. <http://tribunalmigrante.saltoscuanticos.org>

La Jornada

POLÍTICA

 Sábado 28 de agosto de 2010  31

Hay responsabilidad estatal por omisión, acción, complicidad y colusión

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2010, p. 8

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sólo es comparable en el país con las ocurridas en Acteal, Aguas Blancas o El Charco. Allí hubo innegable responsabilidad del Estado mexicano, que ha permitido, por omisión o complicidad, que estos crímenes previsibles y prevenibles sigan ocurriendo.

Así lo denunció el coordinador del Comité del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Camilo Pérez Bustillo, durante la conferencia de prensa a que convocaron este viernes colectivos pro derechos humanos.

Aunque el gobierno y varios medios informativos han querido mostrar los hechos como acción delictiva, se puede hablar también de que hay responsabilidad estatal por omisión, acción, complicidad y colusión en diversos grados, señaló Pérez en entrevista con este diario.

Hay un clima de vulnerabilización, de victimización de los migrantes en tránsito por México, todo muy bien fundamentado en informes de Amnistía Internacional, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, las casas de apoyo a migrantes, el obispo Raúl Vera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, etcétera, expresó el activista.

La matanza en Tamaulipas era totalmente previsible y prevenible, afirmó, y en el derecho penal internacional es igualmente grave cometer un crimen de lesa humanidad como éste –que puede ser considerado genocidio–, que no haber hecho lo suficiente para evitarlo.

Por ello, subrayó Pérez, estamos hablando potencialmente de un crimen de Estado, cometido además contra personas vulnerables que estaban ejerciendo su derecho al libre tránsito, lo cual es otra agravante del delito. Bajo estas circunstancias el Estado es criminal, aunque los disparos los haya hecho la delincuencia organizada, añadió.

“Un antecedente de esto es Acteal, Aguas Blancas o El Charco, porque son crímenes colectivos, como los *feminicidios* de Ciudad Juárez. Es de esas dimensiones. Además estamos hablando de Tamaulipas, la región más militarizada del país.

“En Acteal decíamos: ‘¿Cómo es posible que ocurriera la masacre a 500 metros de un puesto de policía y del Ejército y que no se percataran?’ Lo mismo podemos decir aquí: ¿es creíble que no se percataran de lo que estaba ocurriendo en el rancho de San Fernando? No es creíble”, afirmó Pérez.



RSS • Metrópoli • México • Migración • Internacional •

Condenan ONU y OEA matanza en Tamaulipas

Organización Editorial Mexicana

28 de agosto de 2010

Manrique Gandaria, Carlos Lara / El Sol de México y Agencias

Ciudad de México.- Las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos de derechos humanos repudiaron la matanza de 72 migrantes en México y reclamaron esfuerzos para que no quede impune y evitar así nuevos casos.

"Estoy profundamente impactada por estos asesinatos, que prueban la crítica situación de los migrantes en ese país (México)", dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado divulgado este viernes en Ginebra.

Pillay exhortó a las autoridades mexicanas a "desarrollar una investigación urgente, transparente e independiente" y subrayó que lograr que no haya "impunidad" es "crucial para evitar que se repita un crimen de estas características".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, hizo ayer hincapié en la necesidad de que "todos los gobiernos de la región trabajen juntos en la búsqueda de fórmulas que permitan enfrentar coordinadamente la acción nefasta del crimen transnacional".

"Este trágico episodio refleja la confluencia de dos fenómenos que afectan el desarrollo de América Latina y su sistema democrático: la acción del crimen organizado y la desprotección que viven tantos compatriotas latinos que emigran en busca de un futuro mejor", señaló Insulza en un comunicado.

El secretario general dijo esperar que "este crimen colectivo sea esclarecido", y confió en que el Gobierno mexicano "hará todo lo posible" para que así sea.

En este mismo sentido se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al urgir al Estado mexicano a adoptar "de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos".

El organismo autónomo de la OEA envió una carta al Gobierno de Felipe Calderón en la que solicita información sobre la matanza de Tamaulipas y subraya que la situación de los migrantes en tránsito en México "es un tema de gran preocupación".

La CIDH recordó que, en una audiencia pública celebrada el pasado marzo, recibió "información muy grave" sobre 18 mil casos de secuestro de migrantes en tránsito en 2009.

El Gobierno de Guatemala, país del que proceden algunas de las víctimas, manifestó "su condena enérgica a cualquier tipo de violencia, que atente contra la vida e integridad física y moral del ser humano y especialmente de la población migrante".

Además, "Guatemala reitera y solicita a las autoridades mexicanas una exhaustiva investigación, así como acciones en defensa y protección de los migrantes", señala un comunicado de la Cancillería.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó ayer su esperanza de que su compatriota, Luis Freddy Lala Pomavilla, superviviente de la matanza, pueda retornar al país lo más pronto posible.

Organizaciones defensoras de migrantes acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir al Gobierno mexicano dar con los responsables del multi homicidio en el Rancho San Francisco de Tamaulipas, al tiempo de culpar al Estado de no haber hecho caso a las denuncias que durante mucho tiempo realizaron, respecto a los abusos de que son víctimas los migrantes en México.

Representantes de Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Movimiento Migrante Mesoamericano y del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, corresponsabilizaron al Gobierno mexicano de la muerte de los migrantes, debido a la omisión que ha hecho a las denuncias presentadas durante años, por éstas y otras organizaciones promigrantes.

"Nosotros estamos enojados por lo que está pasando en nuestro país, porque es un secreto a voces lo que está sucediendo, no es un caso aislado lo que pasó con estos 72 hermanos migrantes", indicaron.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" condenaron el asesinato de los 72 migrantes, recordando que las organizaciones que integran la red, han denunciado en ocasiones anteriores los abusos y violaciones a los derechos a las que son expuestas las personas migrantes en México y realizado denuncias de lo que hoy día ocurre en los estados de Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Tabasco, entre otros.

Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.



La masacre indigna a migrantes en México

'Pudo evitarse', dicen diversos grupos y culpan al gobierno

- Gardenia Mendoza Aguilar/gardenia.mendoza@laopinion.com |
- 2010-08-27
- Varios jóvenes latinoamericanos en tránsito por México escuchan una conferencia en la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, donde se pidió protección, respeto a sus derechos humanos y no ser objeto de secuestros o maltratos por parte de funcionarios y policías. **EFE**



MÉXICO, D.F.— "Responsabilizamos al Estado mexicano de la masacre ocurrida en Tamaulipas". Organizaciones de migrantes, madres de desaparecidos y coordinadores de refugios de expatriados resumieron en estas palabras "la rabia" que ha causado la masacre de 72 migrantes que, aseguran, pudo evitarse.

En voz de Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, la culpabilidad apunta a la desidia, la corrupción y la falta de respeto: "Hace dos años y medio que presentamos el informe de otras muertes y torturas de migrantes y el gobierno se centró en debatir las cifras".

Video: [Investigan matanza de 72 inmigrantes](#)

La Comisión de Derechos Humanos documentó 10,000 secuestros en el primer semestre de 2008; sólo el albergue Belén documentó 15 y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas reconocían 7.

Por su parte, diplomáticos de El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador intentaban ayer junto con autoridades mexicanas identificar a las 72 víctimas de la matanza perpetrada el pasado lunes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, al norte del país. Las embajadas hondureña y salvadoreña condenaron los hechos.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR), y la fiscalía estatal averiguan la hipótesis sobre el hecho de que los migrantes —que se dirigían a Estados Unidos— se negaron a colaborar con la organización delictiva de Los Zetas, ex sicarios del cartel del Golfo, hoy traficantes y secuestradores.

Al cierre de esta edición, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas reveló que se habían identificado 15 cuerpos que se encuentran en el forense de Ciudad Victoria, en el mismo estado, hasta donde viajó personal de la Cancillería y cónsules de los países agraviados a través de sus conciudadanos.

Amnistía Internacional recordó que desde el mes de abril documentó en un informe que las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar miles de secuestros, asesinatos y violaciones a migrantes en manos de bandas criminales. "A menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos", puntualizó.

"El Instituto Nacional de Migración y las procuradurías estatales y de la República estaban enterados de que los migrantes que no pagaban su cuota por el rescate en el secuestro los asesinan en venganza", comentó Iris Carvajal, madre de Rafael, un muchacho hondureño de 22 años secuestrado y asesinado en Coatzacoalcos, Veracruz.

Cansada de rogar al Ministerio Público estatal por el cuerpo de su hijo Rafael, la mujer regresó destrozada a Tegucigalpa, desde donde respondió al teléfono: "Me querían dar un cuerpo que estaba desfigurado y yo pedí una prueba de ADN, pero me dijeron que eso sólo existía en las telenovelas. De eso hace dos meses y sigo esperando la prueba".

En octubre de 2008 y febrero de 2009, dos caravanas de mujeres centroamericanas atravesaron la mitad del país en busca de sus hijos desaparecidos que se calculan en cientos; muchos de los cuales se cree que fueron víctimas del crimen organizado.

Sin embargo, ninguna autoridad aceptó reunirse con ellas. El sacerdote Luis Ángel Nieto, de la organización Nuestros Lazos de Sangre, recuerda:

"Personalmente solicité la entrevista con Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), y no aceptó; con Gerónimo Gutiérrez, entonces subsecretario para América del Sur, Centroamérica y el Caribe y tampoco: eran nadie, a nadie importaron".

El INM asegura por su parte que sí ha intentado erradicar el problema y que tan sólo el año pasado logró rescatar a 812 inmigrantes de 16 "casas de seguridad", pero ha sido rebasado por el crimen organizado: "Lamento mucho que no hayamos podido detectar a las 72 personas", expresó Romero en entrevista de radio.

Legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron ayer la renuncia de la funcionaria.

El presidente Felipe Calderón llamó "bestias" a los asesinos y adelantó que investigaría las razones por las que se reveló la identidad del testigo protegido, que logró salvar la vida cuando el tiro de gracia dado por los Zetas se desvió a su cuello y pudo escapar para informar a soldados de la Marina, quienes rescataron los cuerpos de sus compañeros

"Ha sido un momento doloroso, pero tenemos que redoblar el esfuerzo contra el crimen", dijo Calderón.

El gobierno de Estados Unidos aseguró por su parte que "cooperará plenamente" en todo lo que pueda para ayudar a México en la investigación de la "atroz" masacre de los 72 inmigrantes indocumentados.

"Cooperaremos plenamente de cualquier manera que podamos para apoyar a México en la investigación de este atroz crimen", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. "Estamos preparados para ayudar a México si necesita cualquier asistencia".

Con información de Antonieta Cádiz, corresponsal en Washington, D.C.



‘México tiene que responder’

Identifican a 31 de 72 víctimas de la masacre en Tamaulipas

- Gardenia Mendoza Aguilar/gardenia.mendoza@laopinion.com |
- 2010-08-28

MÉXICO, D.F. — El gobierno mexicano y diplomáticos de cinco países latinoamericanos trabajaron ayer a marchas forzadas y lograron identificar a 31 de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, cuyos cadáveres fueron hallados en un rancho a principios de semana en San Fernando, mientras familiares del único sobreviviente pidieron justicia y protección.

"México tiene que responder porque ahora nuestra comunidad está en peligro", dijo Héctor Lala, presidente del poblado indígena Ger, en los andes ecuatorianos, terruño del testigo de la masacre conocido como "Freddy". A través del teléfono, Lala, también pariente del muchacho de 18 años, cuenta con un español entrecortado (su lengua nativa es el quichua) que la familia ha recibido amenazas por parte de un traficante de indocumentados conocido como "Carlos".

Además, ayer divisaron camionetas sin placas que rondaban el Ger, departamento de Cañar, de 180 habitantes y 70 casas, la mayoría construidas con el dinero que envían los emigrantes desde Estados Unidos. Freddy viajaba para alcanzar a su madre Oliva que había tomado el camino hacia el norte dos años atrás, dejando una deuda de 10,000 dólares al "pollero" y ocho hijos a cargo del hoy testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) en México.

El ecuatoriano y el resto de migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Brasil fueron ejecutados en la localidad de San Fernando, en Tamaulipas (noroeste), aparentemente porque sus familias no pagaron los rescates que exigían los delincuentes como cuotas para la liberación del plagio. Desde un primer momento se ha señalado a Los Zetas como responsables de la masacre.

Al menos ese fue el caso del padre de Gelder Bolder, de 17 años, una de las cuatro víctimas guatemaltecas identificadas; del resto al que se ha acreditado la identidad, 14 eran hondureños, 12 salvadoreños y uno brasileño. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, Bolder aseguró haber recibido varias llamadas de hombres con acento mexicano que le comunicaron que tenían secuestrados a su hijo y sus dos yernos, y le exigieron 2,00 dólares.

No fue el caso de la familia de Freddy. "Ni siquiera teníamos noticias de nada", dijo Lala, edil de Ger, quien hace de vocero familiar porque la esposa y los hermanos del migrante fueron intempestivamente cambiados de domicilio por su seguridad y considerados también testigos protegidos por el gobierno ecuatoriano.

La esposa de Freddy, quien es menor de edad, pidió ayer a la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) autorización para viajar a Tamaulipas, ya que está embarazada de cuatro meses y quiere estar con su marido; al gobierno mexicano le pide apoyo para la estancia y justicia.

"Nosotros no hemos hecho nada, somos pobres y nos maltratan, no es la primera vez que pasa algo con nuestros muchachos que se van y pasan por México: hace 10 años murió mi hermano y hace dos meses llegó un muchacho sin piernas, que porque se cayó del tren", lamenta Lala.

Por su parte, organizaciones civiles se manifestaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación mexicana para exigir la detención inmediata de asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones contra inmigrantes que han sido denunciadas desde hace más cuatro años.

"Si saben dónde están los delincuentes porque lo hemos documentado muchas veces como el caso de La Arrocera, donde violan todos los días a las centroamericanas que pasan por un punto en específico en Chiapas para evadir la garita de migración, ¿por qué no hacen nada? ¿porqué no cambian al menos la garita de lugar?", reprochó Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Mauricio Farah, quien coordinó el informe en 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que documentó el secuestro de 10,000 migrantes durante un semestre, urgió al Estado mexicano a tomar medidas urgentes de inteligencia para dismantlar las casas de seguridad donde los delincuentes reclutan a los migrantes.

"El gobierno sabe dónde están porque en la investigación señalamos el modus operandi, puntos donde eran secuestrados, pobladores que tienen la información", comentó. "Las autoridades han sido omisas e incapaces porque son cómplices o están amenazadas".

Cada año cruzan por México alrededor de 300,000 centroamericanos, muchos de los cuales son atacados por el crimen organizado y narcotraficantes que han diversificado sus actividades delictivas.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, afirmó ayer a una emisora local que, debido a la ola de violencia que hay en México, "debe haber fosas comunes en muchas partes de Tamaulipas y del país".

En ese mismo estado, dos coches-bomba estallaron ayer, uno de ellos frente al edificio de la empresa Televisa y el otro en instalaciones de la policía de tránsito.

En los últimos tres años, más de 28,000 personas han muerto en el país por asuntos relacionados con el narcotráfico; cientos más no han sido encontradas.

El presidente Felipe Calderón informó ayer que Roberto Javier Suárez Vázquez, uno de los investigadores de la masacre en Tamaulipas, fue desaparecido.



Reprochan ONG desaire de autoridades

Organizaciones ciudadanas aseguran que el INM, SRE y PF fueron advertidos, pero que no les hicieron caso

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de agosto.- Más de diez organizaciones ciudadanas denunciaron que en Veracruz, Chiapas y otras entidades la delincuencia organizada secuestra a cerca de 200 inmigrantes todos los días.

Desde hace tres años estas ONG han reportado esta realidad y, en rueda de prensa, aseguraron que ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Policía Federal (PF) los han escuchado.

"Hemos dado señales, ya habíamos avisado de que en Tamaulipas se daba el secuestro y la retención de migrantes centroamericanos.

"La ruta inmigrante es un cementerio, ya hay enterradores profesionales que al encontrar sus cuerpos los entierran al lado de las vías del tren, esto no puede seguir así, por omisión de las autoridades", dijo el cura Luis Ángel Nieto, de la organización Nuestros Lazos de Sangre.

En rueda de prensa mostró las listas con los nombres de inmigrantes centroamericanos que han sido secuestrados, lista que ellos han recopilado, donde aparecen los nombres, nacionalidad, dónde desaparecieron, cuándo y cuál fue el último número al que se comunicaron.

Nieto aseguró que en varias ocasiones han tratado de entregar la lista a la SRE y a Segob "y han hecho caso omiso, hay una irresponsabilidad por omisión".

Destacó que buscó a Gerónimo Gutiérrez cuando era subsecretario para América Latina de la Cancillería y no lo quiso recibir. "Lo busqué cuando era subsecretario de Gobernación y tampoco nos quiso abrir las puertas, personalmente hablé con la señora Cecilia Romero, comisionada del INM, en las jornadas de movilidad humana el año pasado y tampoco quiso escuchar", aseveró.

Narró además que "en 2008 llegó la caravana de madres hondureñas que vinieron desde aquel país centroamericano hasta Ecatepec, siguiendo la ruta migrante en busca de sus hijos, y no hubo una sola autoridad del gobierno federal que las escuchara.

"En 2009, la caravana de las madres salvadoreñas hizo presencia buscando a sus hijos desaparecidos y ocurrió lo mismo", dijo.

Sobre la declaración que hizo el coordinador de asesores del INM, Antonio Díaz Lara, de que ha habido 6 o 7 secuestros, Diana Martínez, de Sin Fronteras, recordó que la CNDH dio a conocer que en sólo seis meses en 2009 secuestraron a nueve mil 700 inmigrantes.

"Basta con que las autoridades se acerquen a las estaciones migratorias y allí verán a muchas víctimas de secuestro, de violación, de extorsión, que están esperando a ser deportadas, sin haber podido denunciar estos delitos".

La masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 inmigrantes fueron asesinados "es un holocausto que implica el repudio nacional e internacional.

"Los inmigrantes se están cayendo como moscas, hacemos un llamado a la conciencia de toda la sociedad, de que esto no puede seguir así", expuso Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano en la rueda de prensa, y destacó que la tragedia está poniendo en evidencia la magnitud de los secuestros de indocumentados.

Sánchez aseguró que hay una evidente complicidad de las autoridades en los secuestros: comentó que ha habido muchos casos de agentes del INM implicados en los secuestros.

Georgina Olson

2010-08-28 05:00:00

COMUNICADO DE PRENSA

26 de agosto de 2010

ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, ARGENTINA, COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO EXIGEN RESPETO Y JUSTICIA PARA PERSONAS MIGRANTES

En el marco del **II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”** en donde organizaciones e instancias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, hemos analizado la situación que viven día a día las personas migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible.

Un ejemplo más de lo anterior lo es el incremento de las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno para el establecimiento de mecanismos de registro y de investigación del paradero de cerca de cientos de migrantes.

Otra situación que preocupa no sólo a las organizaciones e instancias firmantes, es el uso de términos que denigran la dignidad humana, discriminan a las personas migrantes y ubican su presencia como una amenaza para la comunidad receptora y de tránsito, tales como: “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades”, “delincuentes”, entre otros. Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general.

Por ello vemos con preocupación que las violaciones a derechos humanos contra migrantes lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, gracias a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia los ciudadanos y ciudadanas migrantes.

En esta tesitura, estamos convencidas que el trabajo que personas, grupos e inclusive cuerpos diplomáticos realizan en favor de la población migrante contribuye a la defensa y promoción de prerrogativas fundamentales de esta población. No obstante, consideramos que no existe protección adecuada para esta labor. Por el contrario, se ha podido documentar que acciones de deslegitimización y hostigamiento continúan en contra de defensores de derechos humanos, a pesar de que algunos de ellos cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Finalmente reconocemos los esfuerzos emprendidos por algunos países para fortalecer la protección consular en países de tránsito y destino de personas migrantes, sin embargo esta debe incrementarse y ser más eficiente debido al contexto de violencia, marginación y discriminación al que muchos de sus connacionales se enfrentan de manera cotidiana, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad.

Por ello, exigimos

Al gobierno de México,

Sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los verdaderos responsables de la reciente masacre de migrantes en Tamaulipas. Tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que por comisión u omisión han permitido actuar libremente al crimen organizado.

Emprender acciones contundentes para que el tránsito de personas migrantes por territorio mexicano sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia.

Prevenir y detener las violaciones sistemáticas de derechos humanos en contra de la población migrante en territorio mexicano.

Agilizar los procedimientos de respuesta de peticiones realizadas por familiares de migrantes fallecidos o desaparecidos.

Promover, respetar y fomentar la labor de defensa integral de los derechos humanos de la población migrante, sea realizada por sociedad civil o por personal diplomáticos,

Fomentar una comunicación mediática con un enfoque de respeto a los derechos humanos

A los gobiernos de Centroamérica,

Emprender acciones conjuntas y contundentes que atiendan el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos considerando las causas y consecuencias estructurales de la migración,

Las instancias firmantes estamos convencidas que las acciones de los distintos gobiernos en la región, lejos de beneficiar a la población y de respetar derechos fundamentales, promueven la criminalización, violencia, discriminación y abusos cometidos en contra de esta población, todo esto en un marco de impunidad y discrecionalidad de las autoridades.

Finalmente les recordamos las obligaciones contraídas a través de la ratificación de instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador –COFAMIDE-
Red para las Migraciones de El Salvador –REDMIGRES –
Centro Feminista Mujer, Información y Acción –CEFEMINA-
Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante –CENDEROS –
Hermana Ma. Genoveva Ochoa Castrejón “Tja Qya” Casa de la Mujer Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor -Guatemala.
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” –IDHUCA- El Salvador
Caritas El Salvador, Diócesis de San Miguel, El Salvador
Mujeres Transformando El Mundo, Guatemala
Foro Nacional para las Migraciones en Honduras –FONAMIH-
Mesa Transfronteriza Migración y Género, Huehuetenango, Guatemala – Chiapas México
Comité de Derechos Humanos de Tabasco –CODEHUTAB
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. Ocosingo, Chiapas, México.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Comitán, Chiapas México.
Centro de Derechos del Migrante A.C. Ciudad Juárez, México
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. CIEPAC
Colectivo ANSUR, Colombia
Centro Pastoral de Atención al Migrante y Casa del Migrante, Ciudad de Guatemala
Casa Alianza de Honduras.
Equipo de Estudios Comunitarios Acción Psicosocial –ECAP – Guatemala.
Global Workers Justice Alliance
Asociación Red Comités de Migrantes y Familiares de Honduras –RED COMIFAH-
Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala.
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES – Guatemala
Casa del Migrante de Tecún Uman San Marcos, Guatemala
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG-
Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. Tapachula, Chiapas, México
Casa del Migrante de Saltillo, México
Albergue Hermanos del Camino en Ixtepec Ixtepec, México

IDHEAS Litigo Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina
Servicio Jesuita a Migrantes, México
Tapachula, Chiapas, a 26 de agosto de 2010.

Para mayor información y entrevistas individuales:
Fermina Rodríguez Velasco
Tel: 962 626 70 88

Masacre de Migrantes en San Fernando, Tamaulipas



Dignidad & Justicia

Southwest Workers Union de San Antonio, Texas próximo a la frontera con el estado fronterizo de Tamaulipas, denuncia el grado de violencia contra Migrantes cruzando México, y la cruel matanza de 72 seres humanos que fueron muertos a balazos, estilo ejecución, por sicarios integrantes de la Zeta.

Esto nos hace tomar acción por los derechos de los y las Migrantes que demandamos deben tener DERECHO A LA CIUDADANIA UNIVERSAL que se respete los plenos derechos de cada ser humano en cualquier lugar que se encuentre.

Demandamos que el Presidente (espurio) de México y las autoridades que se haga justicia y este violento y grave masacre de gentes inocentes que solo buscaban darle de comer a su familias.

Enviamos nuestra solidaridad con las familias de los y las dfunt@s. Que en paz descansen.

COMUNICADO DE PRENSA

26 de agosto de 2010

El Estado mexicano ha omitido brindar una efectiva y adecuada protección a las personas migrantes ante la sistemática ola de violencia en su contra

Sin Fronteras repudia el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas y exige una investigación profunda y expedita que llegue a consignar a los responsables.

Llamamos al Estado Mexicano a diseñar una verdadera política de Estado en materia migratoria integral, que no se agote en una gestión de flujos migratorios sino que tenga como centro los derechos humanos de las personas migrantes.

La información que se hizo pública el día 25 de agosto de este año por diversos medios de comunicación, en relación al asesinato de 72 personas migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, en el municipio de San Fernando Tamaulipas, expone la falta de compromiso del Estado mexicano para reconocer y terminar con la violencia de que son objeto miles de transmigrantes a lo largo del país, así como para construir una política de Estado en materia migratoria que no acentúe esquemas de seguridad frente a los de desarrollo y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Sin Fronteras manifiesta su repudio a este tipo de hechos que ponen en relieve, una vez más, la omisión del Estado para garantizar la seguridad e integridad física de las personas migrantes que se encuentran y transitan por su territorio. Además, este suceso refleja que la posición de las autoridades migratorias, no cuenta con una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en materia migratoria, y que, por el contrario permite la criminalización de la población migrante, lo que genera graves violaciones a sus derechos humanos. Esta falta de respuesta de parte de las instituciones del Estado invisibilizan la problemática que sufre este grupo en situación de vulnerabilidad y restringe su acceso a la justicia cuando son víctimas de delitos tales como secuestro, extorsión u homicidios, etc.

No obstante que el Estado Mexicano defiende y preserva el tema de la migración y los derechos humanos en foros internacionales, hasta este momento, las instituciones gubernamentales y funcionarios públicos involucrados en materia migratoria y procuración de justicia, no han demostrado interés ni preocupación que se traduzca en hechos concretos respecto a esta problemática en territorio nacional.

Lamentamos de manera categórica que hechos de esta naturaleza se hayan convertido en un modus operandi de las bandas delictivas y que se conviertan en estampas crudas de descomposición social generalizada, y que advierte una mayor escala de violencia ante ausencia de una estrategia clara y consensada por parte del Gobierno para enfrentarla, impactando con mayor fuerza a la población migrante.

Finalmente, las declaraciones de Antonio Díaz Lara, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, recogidas de los medios de comunicación, respecto las acciones que el Gobierno Mexicano ha desarrollado para prevenir esta situación y afirmando que el INM ha tenido conocimiento de seis o siete casos en los que indocumentados han sido secuestrados por grupos criminales resultan inadmisibles y escandalosas.

El gobierno Federal ha tenido conocimiento de diversos informes por parte de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la migración y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hacen patente los miles de secuestros que se han registrado a lo largo de la ruta migratoria en México.

Ante estos hechos

Sin Fronteras hace un llamado a las tres esferas de Gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen de manera intergubernamental para:

1. Realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva que de con los responsables de tan lamentables hechos.
2. Combatir de manera urgente el tráfico ilícito de migrantes y todas aquellas actividades criminales asociadas velando siempre por la integridad y seguridad de las víctimas de estos delitos.
3. Desarticular los vínculos existentes entre las redes delincuenciales y las fuerzas policiacas y migratorias, que ocasionan que el secuestro, la extorsión y los abusos de migrantes se cometan con completa impunidad y sin sanción alguna
4. Sin Fronteras llama al Gobierno Federal a cumplir con las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas en el sentido de garantizar los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como de abrir espacios efectivos de diálogo con la sociedad civil.

Contacto

Paulo S. Martínez - Encargado de Comunicación - 55141519 ext.129 - Sin Fronteras I.A.P.

COMUNICADO DE PRENSA

26 de agosto de 2010

La Masacre a los 72 migrantes es una irresponsabilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos

Saltillo, Coahuila a 26 de agosto del 2010: Ante la masacre de cincuenta y cuatro hombres y catorce mujeres migrantes ocurrida en días pasados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, la Casa del Migrante de Saltillo condena abiertamente los hechos sucedidos y manifiesta lo siguiente:

- Que éste no es un hecho aislado, sino que corresponde a todo un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que los condena la política migratoria actual. En este sentido:
 - Reprobamos la declaración del gobierno federal en la que se manifestó que esta masacre corresponde a pugnas libradas entre grupos del crimen organizado.
 - Condenamos la falta de voluntad del Instituto Nacional de Migración para aceptar la realidad de sistemática violación de derechos humanos de las personas migrantes y decir, como lo ha expresado, que únicamente se han registrado en el año “seis o siete eventos de secuestro”.
 - Consideramos totalmente insuficientes las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un acontecimiento tan significativo de holocausto contra personas de países latinoamericanos
- Esta masacre es una muestra clara de que la política migratoria actual del Estado mexicano no sólo no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se

cometan estos delitos, teniendo como consecuencia que esta dolorosa migración de supervivencia deje de tener esperanza y futuro para estos pueblos empobrecidos.

- Este acontecimiento no sólo pone en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleve a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México

- Por otra parte, destacamos que este acto respalda los testimonios de numerosas víctimas, quienes expresan que grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos. Asimismo, es muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noreste del país.

- En este sentido, en repetidas ocasiones hemos denunciado que Coahuila no está exenta de estos graves hechos. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales para que, de una sola vez, erradiquen todas aquellas condiciones de inseguridad que conllevan a que este tipo de delitos y verdaderas masacres, se cometan en completa impunidad.

- Ante la grave problemática, es urgente que el Estado mexicano acepte colaborar con las demandas de los estados centro y sudamericanos, de tal manera que pueda llegar al fondo de las investigaciones y a la justicia y compensación a las innumerables víctimas y a sus familias. Asimismo, es necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México.

BELÉN, POSADA DEL MIGRANTE, FRONTERA CON JUSTICIA, A. C., HUMANIDAD SIN FRONTERAS, A. C., CENTRO DIOCESANO PARA LOS DERECHOS HUMANOS FRAY JUAN DE LARIOS, DIÓCESIS DE SALTILLO.

Martín R. Hernández Linares, Celular en Coahuila: 044 ó 045 866 123 06 66, Celular en D.F.: 044 ó 045 55 19 51 56 55